JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA

Socorro (S.), diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Exp. 68755-3184-002-2022-00083-00.

Resuelve el despacho el recurso de reposición interpuesto por el mandatario de la parte actora, contra el auto del 30 de junio del año en curso, específicamente el numeral 4° en cuanto ordenó adecuar la solicitud de medidas cautelares a las directrices del artículo 590 del Código General del Proceso y prestar caución.

Estima el censor que el ordenamiento referido no se ajusta a la normatividad y a la jurisprudencia vigente, en razón a que con la concepción del conjunto normativo en cita, ya no se debe aplicar el artículo 590 en punto de las cautelas, sino el 598 que de manera especial regula las medidas cautelares en los procesos de familia, y que amplía la esfera del canon 691 del anterior C.P.C. y ahora dispone que se aplicarán a los procesos de nulidad del matrimonio, divorcio, cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, y liquidación de sociedades conyugales, y adiciona expresamente la disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, por lo que en vigencia del nuevo estatuto en los procesos de unión marital de hecho en los que se pretenda consecuentemente la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, procederá el embargo y secuestro de bienes, toda vez que la disposición indica que cualquiera de las partes podrá pedir estas medidas respecto de los bienes que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza de la otra.

Precisó que para el caso debe tenerse en cuenta la decisión de la Sala Civil de Corte Suprema de Justicia que aclaró la doctrina plasmada en la sentencia STC-18692017 (201700235) del 26 de febrero de 2017 para precisar que en los procesos declarativos de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con miras a la liquidación de esta última, si es procedente el embargo y secuestro de bienes que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza de la parte convocada conforme al canon 598 del C.G.P., por lo que puede solicitarse de manera acumulada la inscripción de la demanda y el embargo y secuestro de bienes objeto de gananciales, así como las innominadas, sin que la materialización de algunas de ellas, impida efectuar las restantes, pues si bien el listado del inciso primero de la norma citada solamente alude a disolución y liquidación de sociedades

patrimoniales entre compañeros permanentes, sin hacer alusión a los de simple declaratoria de unión marital, el numeral 3° de la disposición no deja dudas sobre su procedencia, pues allí se precisa que las cautelas se mantienen hasta la firmeza de la sentencia, a menos que fuere necesario liquidar la sociedad patrimonial, y siendo la finalidad del embargo extraer los bienes del comercio, eso si indispensable que los bienes sobre los que recaen figuren a nombre del compañero permanente demandado, siempre que hagan parte de la comunidad, todo ello en consonancia con la sentencia STC-153882019 de noviembre 13 de 2019, por tanto, en aplicación de la jurisprudencia no era procedente ordenar la adecuación de las medidas a las previsiones del art. 590 del C.G.P., por lo que en consecuencia pidió que se revocara esa específica determinación y se decretaran en su totalidad las medidas cautelares solicitadas.

Para resolver, se considera:

Conforme al artículo 318 del Código General del Proceso, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen.

En el numeral 4° del auto del 30 de junio del año en curso que admitió a trámite el libelo, se ordenó a la parte actora adecuar la solicitud de medidas cautelares, a las especificaciones contenidas en el artículo 590 del Código General del Proceso y prestar caución por el equivalente el 20% de las pretensiones tal como lo prevé el numeral 2° de la disposición.

El mencionado precepto consagra las medidas cautelares en procesos declarativos, como el que nos concierne y al efecto prevé que en esos específicos trámites se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las mismas, consagrando en el numeral 1° que desde la presentación de la demanda, a petición de la parte actora, el juez podrá decretar las siguientes medidas: “a) la inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, (...) y c) Cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”, para cuyo decreto debe apreciarse por parte del juez “la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho”, y así mismo

tendrá en cuenta “la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte su modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada”.

Finalmente, el numeral 2° de la comentada norma prevé que “Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica...”.

Ahora bien, en anexo separado el mandatario de la actora solicitó con sustento en el artículo 598 del C.G.P. y la sentencia STC-1869-2017 del 26 de febrero de 2017 como medidas cautelares el embargo y secuestro de los bienes inmuebles que adujo pertenecientes a la sociedad patrimonial pretendida, concretamente los identificados con matrícula inmobiliaria 321-27207, 321-13413, 321-36126, 321-36972, 321-4658 y 321-18538, todos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta localidad, habiéndose ordenado por el despacho la adecuación de las mismas a lo prevenido en el canon 590 ibídem que consagra las cautelas de manera general en los procesos declarativos.

Ciertamente la relación que trae el artículo 598 citado que enlista las medidas cautelares en proceso de familia, expresamente prevé como tales: los de nulidad de matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, liquidación de sociedad conyugales, disolución y liquidación de sociedad patrimoniales entre compañeros permanentes, sin que aluda en parte alguna al de unión marital de hecho.

Sin embargo, se advierte en la sentencia ST-15388-2019, traída a colación por el recurrente, que por vía de impugnación en acción de tutela de 13 de noviembre de 2019 emitió la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en la cual se precisan aspectos cardinales en torno a la viabilidad de solicitar medidas cautelares en estos específicos trámites, con ponencia del Magistrado Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo en la cual precisó:

“3.1. De acuerdo con los artículos 590 (numeral 1, literales a y c) y 598 del Código General del Proceso, desde la presentación de la demanda de declaratoria de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con miras a su posterior liquidación, proceden (i) la inscripción de la demanda, (ii) medidas cautelares

innominadas y (iii) el embargo y secuestro de bienes que puedan ser objeto de gananciales.

La inscripción de la demanda, de acuerdo con el numeral 1, literal a, del artículo 590 ibidem, procede en la medida que se trata de una pretensión que, de forma consecuencial, versa sobre el derecho real de dominio, pues cuando se liquide la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el bien respectivo puede adjudicarse a uno de ellos.

Aunque la inscripción de la demanda no sustrae los bienes del comercio y, por tanto, su materialización no impide que estos sean enajenados, tiene como finalidad hacer oponible frente a terceros la sentencia que al interior del proceso de familia se profiera, consecuencia que se deriva de los preceptos 303 y 591 ejusdem. Además, la inscripción de una demanda no impide que se lleve a cabo esa misma medida cautelar o un embargo por cuenta de otros procesos, ni mucho menos que el bien respectivo sea rematado al interior del ejecutivo.

Eso sí, para decretarla es indispensable que además del contenido de la pretensión, el juez de familia verifique que el bien puede ser objeto de gananciales y que es propiedad del demandado, pues si alguno de estos requisitos se encuentra ausente, deberá negarla o, en caso de haber accedido indebidamente a ella, levantarla por los cauces legales a que más adelante se hará referencia.

La inscripción del libelo requiere petición de parte, la cual puede efectuarse en cualquier momento desde la presentación de la demanda y antes de que se profiera sentencia aprobatoria del trabajo partitivo de la sociedad patrimonial entre convivientes.

En todo caso, por disposición expresa del numeral 2° del artículo 590 ibid, es necesario que el solicitante preste caución del 20% del valor de las pretensiones, es decir, de la cantidad que espera le sea adjudicada en la liquidación (el resaltado no es del texto).

Por otro lado, en segundo lugar, las medidas cautelares innominadas también proceden en este tipo de asuntos y consisten en aquella «que el juez encuentre razonable para la proyección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión». Para acceder a ella, además de acreditar los requisitos de verosimilitud del derecho y riesgo de la demora del trámite, previstos en el numeral 1° del literal c del artículo 590 ibidem, también será necesario prestar caución por el accionante.

Adicionalmente, y en tercer lugar, el embargo y secuestro de bienes que puedan ser objeto de gananciales que sean propiedad del demandado también es procedente en procesos de declaratoria de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con miras a su posterior liquidación, pues si bien el listado del inciso 1° del artículo 598 ejusdem solamente refiere los trámites de «disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes», sin hacer referencia a los de simple declaratoria de

unión marital de hecho y la mencionada sociedad, el numeral 3º de la misma disposición no deja dudas sobre dicha procedencia, pues señala que tales cautelas se mantendrán hasta que la sentencia cobre firmeza, a menos que «fuere necesario liquidar la sociedad patrimonial...».

Explicado de otra manera, aunque la primera parte de la norma citada podría suscitar dudas sobre la procedencia del embargo y secuestro de bienes que puedan ser objeto de gananciales y sean propiedad del demandado, cuando la pretensión consista en declarar la existencia de una unión marital de hecho y de una sociedad patrimonial entre quienes tuvieron una comunidad de vida, con el fin de que luego se liquide esta última, el numeral 3º despeja cualquier incertidumbre al respecto cuando dispone que la ejecutoria de la sentencia, por regla general, ocasiona el levantamiento de la cautela, a menos que «a consecuencia de ésta fuere necesario liquidar la sociedad patrimonial», lo que significa que la firmeza del fallo que reconoce que existió una sociedad patrimonial que ha quedado disuelta y debe liquidarse, no extingue la cautela que se viene comentando, pues la misma es necesaria para garantizar los efectos de la decisión que se emita en la fase liquidatoria del trámite.

Eso sí, el demandante tiene la carga de solicitar oportunamente al juez de familia que conoció del trámite que proceda con la liquidación del acervo patrimonial, pues de lo contrario, «se levantarán de oficio las medidas cautelares» (inc. 2, núm. 3, art. 598 *ibid.*).

La finalidad del embargo y secuestro de bienes, a diferencia de la mera inscripción de la demanda, sí radica en extraerlos del comercio, al punto que sobre los mismos no pueden efectuarse enajenaciones.

Asimismo, es necesario que los bienes sobre los que recaen figuren a nombre del compañero permanente demandado, siempre que hagan parte de la sociedad patrimonial, pues, en caso contrario, el afectado «podrá promover incidente con el propósito de que se levanten las medidas que afecten sus bienes propios» (Núm. 3º, art. 598 *ejusdem*).

Con el interés de satisfacer el interés de terceros acreedores y hacerle frente a posibles irregularidades que, de consuno, pretendan llevar a cabo los convivientes para frustrar determinadas acreencias, el legislador consagró la prevalencia de los embargos y secuestros que se efectúen por cuenta de otros procesos ejecutivos. Esto significa que, sin importar que ya se hubiere practicado el embargo al interior del proceso de declaratoria de existencia y disolución de sociedad patrimonial, puede decretarse uno más sobre el mismo bien por cuenta de otro proceso ejecutivo, y el registrador «simultáneamente con su inscripción ... cancelará el anterior de inmediato [y] ... el remanente no embargado en otras ejecuciones y los bienes que en éstas se desembarguen, se considerarán embargados para los fines del asunto familiar», como dispone el numeral 2 del artículo 598 de la misma obra.

Es necesario aclarar que el promotor del proceso de declaratoria de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes puede solicitar de manera acumulada las medidas cautelares nominadas de inscripción de la demanda, embargo y

secuestro de bienes que pueden ser objeto de gananciales, así como innominadas, sin que la materialización de alguna de ellas impida efectuar las restantes. Además, ni el registro de la demanda ni el embargo de los bienes impide que puedan registrarse otras demandas, como claramente lo consagra el inciso 3° del artículo 591 ejusdem, en cuanto dispone que el «registro de otra demanda o de un embargo no impedirá el de una demanda posterior ... ni el de un embargo posterior».

Las consideraciones expuestas justifican que la Corte aclare la doctrina plasmada en STC1869-2017, 16 feb. 2017, rad. n°. 2017-00235, para precisar que en los procesos de declaración de existencia unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con miras a la liquidación de esta última, también es procedente el «embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza» de la parte convocada, de acuerdo con el artículo 598 del Código General del Proceso...”

En este orden de ideas y de acuerdo con el criterio jurisprudencial citado, para el despacho es claro que en tratándose de uniones maritales de hechos como la que nos concierne, es procedente la medida cautelar de embargo y secuestro, tal como se solicitó en el libelo introductorio, pues los bienes inmuebles sobre los que se pretende figuran como de propiedad el demandado Jairo Muñoz Granados, siendo indispensable que la parte interesada preste caución en el equivalente al 20% de las pretensiones, tal como lo exige el numeral 2° del artículo 590 del C.G.P., razón por la cual se repondrá la determinación cuestionada, solamente en cuanto ordenó adecuar la solicitud de las cautelas a la preceptiva de la norma mencionada.

Por lo expuesto, el Juzgado el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, resuelve:

Primero: Reponer el numeral cuarto del auto proferido el 30 de junio de 2022, en cuanto ordenó a la parte actora adecuar la solicitud de medidas cautelares a las previsiones del artículo 590 del C.G.P.

Segundo: Reiterar la orden de prestación de caución por el equivalente al 20% del valor de las pretensiones, a fin de decidir sobre las de medidas.

NOTIFIQUESE

El Juez,

JORGE LEONARDO GARCIA LEON

Firmado Por:
Jorge Leonardo Garcia Leon
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Promiscuo 002 De Familia
Socorro - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **becfc822a1f59a4e515a9ec80455f624e1de39f2cd0c023c2970bf20bc5f31cb**

Documento generado en 10/08/2022 03:34:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>